

Daños del desarrollo veloz pero desequilibrado

España vivió durante los últimos seis años una de las peores crisis económicas de su historia.

El país comienza a salir lentamente de la postración, pero la recuperación recién empieza y enfrenta complejos desafíos.

La crisis de la deuda soberana que eclosionó en los años 2011/2012 reveló defectos estructurales en el proyecto de unión monetaria europeo. En teoría, la adopción del “euro” debía generar una “convergencia” económica entre los estados miembros. Se preveía que la productividad media de los países económicamente menos adelantados, como España, alcanzaría los niveles medios de productividad de los países más avanzados, como Alemania, Austria y Holanda.

España creció entre los años 2000 y 2007 un promedio anual del 3,5%, gracias a una fuerte entrada de capitales y a una sustancial reducción en los costos financieros. Esto facilitó un extraordinario boom de la construcción y una fuerte expansión del turismo, el sector financiero y otros servicios relacionados al sector inmobiliario.

Pero la “convergencia” no ocurrió.

El desarrollo español fue veloz pero desequilibrado. El crecimiento fue el resultado casi exclusivo de inversiones en el sector de la construcción y de aumentos en la fuerza laboral sostenidos por una masiva corriente inmigratoria (la población trabajadora extranjera saltó de menos del 1% del total en 1996 al 12.5% en el 2011).

La construcción llegó a absorber casi el 15% de la mano de obra total versus un promedio del 9% en la zona euro. Sin embargo, se estancó la productividad en los sectores de bienes transables: principalmente la industria, la agricultura y los sectores exportadores.

El boom de la construcción ocurrió de la mano de una vertiginosa expansión en el crédito.

El endeudamiento de las familias aumentó exponencialmente y pasó de representar el 68% del total de ingresos disponibles en el año 2000 a casi el 135% en el año 2008.

Las exportaciones se estancaron, las importaciones crecieron y el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos alcanzó casi el 10% del PBI en el año 2007.

La economía se sobrecalentó y se volvió fuertemente dependiente del financiamiento externo.

La crisis financiera internacional del 2008/2009 limitó la entrada de capitales y generó una aguda crisis de liquidez doméstica que hizo estallar la burbuja inmobiliaria.

Los precios promedio del sector inmobiliario cayeron un 40% entre el 2008 y la actualidad.

El sector de la construcción se desplomó (los nuevos permisos para construir se redujeron de más de 800.000 en el año 2008 a menos de 35.000 durante el año 2013) y el desempleo se incrementó exponencialmente de niveles del 8,3% en el año 2007 al 26,9% a fines del año 2012.

La devastadora crisis inmobiliaria golpeó de lleno al sector financiero y puso en riesgo la liquidez y solvencia de numerosos bancos. El gobierno, con el apoyo de las instituciones europeas y el FMI, organizó un ambicioso programa de salvataje que incluyó fusiones, capitalizaciones y cierres de entidades financieras.

Desafortunadamente, el proceso de salvataje del sector financiero incrementó la deuda pública y agravó el déficit fiscal (llegó al 10% del PBI en el 2011). Esto generó durante el primer semestre del año 2012 una masiva fuga de capitales (se temía que España saliera del euro) y una grave crisis de las finanzas públicas.

La crisis finalmente se controló gracias a un demorado apoyo del Banco Central Europeo en julio del 2012 después de que el gobierno español aceptara a regañadientes las políticas de austeridad propiciadas por Berlín.

El nuevo gobierno español introdujo durante el año 2012 importantes reformas en el mercado laboral con el propósito de aumentar la demanda de trabajo. En lo esencial, se trató de descentralizar las negociaciones colectivas al nivel de las empresas, relacionar los aumentos de sueldos a los aumentos de productividad y flexibilizar los costos del despido.

La profunda reestructuración del sector bancario (2009-2010), el restablecimiento del crédito público (2012) y la reforma laboral (2012) fueron **procesos complejos y dolorosos** que España tuvo que transitar para restablecer la solidez de su sector financiero, recomponer el crédito público y reiniciar un proceso de crecimiento sobre bases menos endeblés.

La economía española está mostrando signos de recuperación.

Se estima que el PBI crecerá el 1,4% este año y se proyecta un 2,2% para el 2015. Las exportaciones aumentaron a tasas promedio del 5,5% durante los últimos tres

años y la cuenta corriente de la balanza de pagos se volvió superavitaria. El sector financiero recuperó la confianza de ahorristas e inversores. Los precios de las propiedades dejaron de bajar, el déficit gubernamental se redujo al 5% del PBI y el desempleo cayó un poco al 24% de su población activa.

Los problemas estructurales de la economía española fueron ignorados durante muchos años y están aún por resolverse.

La incorporación a la zona euro le generó a España beneficios inmediatos, pero no creó incentivos para poner en marcha las modificaciones necesarias para modernizar realmente su economía.

El gran desafío de España para reducir su enorme desempleo y aumentar la productividad de su economía es **exportar más y desarrollar un sector empresarial productor de bienes y servicios transables**, que sea competitivo a escala regional y mundial. Para ello, necesita mejorar su sistema educacional (sólo el 54% de la población activa terminó el secundario), desarrollar programas de entrenamiento profesional para capacitar a los desempleados, mejorar su infraestructura de transporte, integrar el esfuerzo científico y tecnológico a la producción e incrementar la competitividad de su sector de servicios que está plagado de regulaciones obsoletas y de áreas protegidas que dificultan el crecimiento de su sector privado, sobre todo de sus numerosas pequeñas y medianas empresas. Sólo así España podrá crecer, reducir el desempleo y equilibrar sus cuentas externas.